




Acompañando una
Oportunidad
para la **PAZ**



COLOMBIA y sus esfuerzos
por construir la paz

LA REINTEGRACIÓN
el camino hacia la paz

Comisionado para la Paz y Alto
Consejero para la Reintegración, Frank Pearl

VIDAS cruzadas, paralelas y encontradas

Entrevistas a desmovilizados
del paramilitarismo y la guerrilla

Entrevista Luis González
Jefe de la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía de Colombia

¿Qué han dicho los informes
de la MAPP/OEA sobre el proceso
de Paz en Colombia?

**Más de 2.000 días
con Colombia**



Organización de los
Estados Americanos

José Miguel Insulza
Secretario General

Albert R. Ramdín
Secretario General Adjunto

Víctor Rico
Secretario para Asuntos Políticos

Raúl Alconada
Director del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

Marcelo Alvarez
Jefe de Misión
MAPP/OEA

Rodrigo Zubieta
Coordinador de la Unidad de Análisis de Misiones Especiales

Las opiniones que aparecen en esta publicación son de estricta responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente las ideas y opiniones de la Secretaría de asuntos Políticos de la OEA o de la MAPP/OEA. Permitida su reproducción, previa consulta a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia



Alexis Del Pozo
Coordinación de la publicación

Luz Mery Avendaño
Diagramadora

Editorial Gente Nueva
Impresión
PBX: 320 21 88

CONTENIDO

- 1 A manera de presentación
- 3 COLOMBIA
y sus esfuerzos por construir la paz
- 4 Conciliemos-Conciliadores en Equidad
en el municipio de Tierralta, Córdoba
- 6 LA REINTEGRACIÓN. El camino hacia la paz
por Frank Pearl, Comisionado para la Paz y Alto
Consejero para la Reintegración
- 8 Pensar en conjunto
Módulo de Formación de Líderes en Urabá
- 10 Vidas cruzadas, paralelas y encontradas
- 13 ENTREVISTA
Luís González, Jefe de la Unidad de Justicia y Paz
de la Fiscalía
- 14 Apoyo psicosocial en libertad
- 15 EXHUMACIONES
La camisa me está llamando
- 17 El incidente de reparación
una herramienta para sanar las heridas
del pasado
- 18 ARHUACOS
un pueblo que se aferra a su cultura
- 19 En Colombia
todas somos Mujeres
- 21 SAN CARLOS
construyendo procesos de reconciliación para
cerrar el círculo de la violencia.
- 23 ¿Qué han dicho los informes trimestra-
les de la MAPP/OEA sobre el proceso?

¿Que es la Misión y Mandato?

El 23 de enero del año 2004, el Gobierno de Colombia y el Secretario General de la OEA, firmaron un acuerdo para establecer una Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) que realizara un acompañamiento amplio y flexible a la Política de Paz del Gobierno Nacional con los grupos armados ilegales. La Misión depende del Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales de la Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA.

El Mandato original de la Misión, fue formulado en términos amplios, bajo los principios de autonomía, neutralidad, flexibilidad y respeto a la soberanía nacional. Éste incluye temas como el seguimiento al Proceso de desmovilización, desarme y reintegración de excombatientes, el monitoreo de la Ley de Justicia y Paz, marco legal generado en este proceso para la búsqueda de verdad, justicia y reparación y el acompañamiento a iniciativas de paz gubernamentales, institucionales, locales y comunitarias.



A manera de presentación

Marcelo Alvarez, Jefe de Misión
Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA

Desde que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA se instalara hace 5 años, Colombia se ha transformado profundamente. En un país de gran complejidad política, social y geográfica, el proceso de paz, con sus retos y dificultades, ha logrado impactar la realidad de manera radical e irreversible. Conforme va avanzando el proceso, se hace evidente la magnitud de los desafíos que implica la resolución de una situación de violencia de más de seis décadas. A medida que se consolida la posibilidad de la paz, así mismo aumentan las tareas necesarias para hacer que ésta sea sostenible y duradera.

Son muchas las enseñanzas que nos deja este Proceso a todos y todas las que participamos en su acompañamiento y apoyo, han sido etapas de crecimiento profesional y personal. Profesional ya que la Misión, conforme a las necesidades de los colombianos y colombianas y los ritmos del Proceso, ha tenido que adaptarse y flexibilizarse según condiciones cambiantes. Personal,

ya que no se puede procurar la generación de paz si no somos capaces de transformarnos a nosotros mismos y abrir nuestros oídos y nuestros corazones para escuchar al otro.

Otra de las innumerables lecciones que nos deja el Proceso es que la Paz, en un país tan diverso, se construye desde abajo, con los conocimientos, experiencias, pensares y saberes de los que han sido afectados/as por la violencia, y que, día a día, siguen proyectando para sus hijos e hijas, para sus familias y comunidades un mejor futuro. Hemos aprendido que para la paz no hay recetas mágicas y que se construye a diario, con constancia, desde la humildad y el compromiso, yendo a la par de los esfuerzos de los colombianos y colombianas.

En el transcurso de estos 5 años, el proceso ha abierto puertas, y poco a poco se han ido involucrando más y más sectores que antes observaban escépticos este esfuerzo colectivo; la expedición de la Ley de Justicia y Paz ha permitido que las víctimas pasen a un primer plano y

tengan la posibilidad, por primera vez en la historia de Colombia, de hacer efectivos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

La complejidad del proceso hace que los desafíos hacia el futuro sean enormes: el surgimiento de dinámicas de violencia relacionadas con el narcotráfico produce una grave afectación en las comunidades que se esfuerzan por reconstruir su tejido social; las amenazas a la seguridad y el reclutamiento de desmovilizados constituyen un fuerte obstáculo para el proceso de reintegración a la vida civil. Así mismo, la magnitud del proceso de justicia y paz representa un reto que pone a prueba constantemente la capacidad institucional del Estado colombiano.

Desde febrero del 2004, cuando la Misión llegó a Colombia, al día de hoy se han alcanzado logros muy importantes, y hemos presenciado y acompañado, en más de 2.000 días de trabajo en Colombia, el inicio de una transformación en el país, siendo ahora el momento de consolidar estos esfuerzos.

Hemos apoyado de manera constante a la institucionalidad en este esfuerzo de retomar los territorios y recuperar la confianza de los pobladores. Hemos sido críticos también, pero siempre con la convicción de que el esfuerzo vale la pena, y de que nuestro papel como organismo acompañante es simplemente contribuir a que las esperanzas de paz de los colombianos, expresadas a través de las desmovilizaciones, la reintegración, la Ley de Justicia y Paz y la reparación de cientos de miles de víctimas, puedan llegar a feliz término.

Nuestro trabajo ha contribuido a la generación de espacios de diálogo, confianza y articulación entre las comunidades, instituciones locales y nacionales, y la comunidad internacional. La labor realizada ha servido para tender un puente entre las víctimas y comunidades que sufrieron el conflicto y las institucio-

nes que procuran consolidar, nuevamente, la presencia institucional y la confianza en las regiones, acercando las necesidades de los moradores de las zonas afectadas por la violencia a la oferta institucional

Hay grandes retos pendientes en el Proceso y en especial en materia de Verdad, Reparación, y Tierras. El inicio de las reparaciones administrativas, y la instauración de los Comités Regionales de Restitución de Tierras en varios departamentos indican que el terreno está abonado. Pero son estos tres grandes temas en la actualidad los que requieren de amplios consensos con diversos sectores de la sociedad colombiana, para que este acuerdo sea un fundamento en la búsqueda de soluciones creativas y a la vez pragmáticas que puedan servir al restablecimiento de los derechos de las víctimas, a la no repetición y la reconciliación.

No queremos cerrar este texto sin dar un agradecimiento a las personas que, con sus testimonios, palabras o escritos han colaborado para la elaboración de este boletín, y aportan diariamente al fortalecimiento de la paz desde sus respectivos roles: autoridades institucionales, desmovilizados/as que con sus testimonio enseñan otras facetas de la realidad, promotores de proyectos e iniciativas comunitarias, líderes comunitarios y víctimas que constituyen una polifonía de voces sobre las que sustentar los esfuerzos de paz.

Así mismo, reiterar la disposición de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos a través de su Misión de Apoyo al Proceso de Paz, para seguir aportando en el proceso colombiano, aporte que es el reflejo del compromiso, la voluntad y la solidaridad unánime de los países miembros de la Organización, que junto a países observadores y donantes han decidido apoyar a Colombia en su camino hacia una paz sostenible. ■

MAPP/OEA hacia la calidad de gestión

Siguiendo los lineamientos de la Secretaría General y la Secretaría de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos para mejorar los modelos de gestión organizacionales y su calidad, la MAPP-OEA viene realizando importantes avances y ha dado un salto cualitativo con la incorporación del modelo mínimo de gestión, aplicable de manera descentralizada en cada una de las 13 oficinas regionales, la planeación por áreas gerenciales a nivel central, y la consolidación de indicadores de resultado. Adicionalmente, ha desarrollado sistemas de evaluación de desempeño colectivo e individual, ha realizado varios estudios diagnósticos para la optimización de los recursos disponibles, tercerizando algunos servicios, y está desarrollando un esfuerzo retrospectivo para la validación de los impactos obtenidos como fruto del trabajo. Adicionalmente y de cara al nuevo mandato, se encuentra en vías de implementar una metodología integrada de gestión por resultados que incorpore elementos de acción sin daño –como el análisis de conflicto y contexto–, transversalidad de género y tratamiento diferenciado a comunidades específicas.



Colombia y sus esfuerzos por construir la paz



Colombia es un país que durante su historia reciente ha estado afectado por la violencia, pero que también ha desarrollado esfuerzos por consolidar la paz. En las últimas tres décadas, el gobierno colombiano y las dirigencias de los grupos armados ilegales han explorado la solución política y negociada al conflicto armado. Se han ensayado toda suerte de mecanismos de negociación, unos con más éxito que otros, la mayoría de intentos se han realizado asumiendo que la negociación se debía dar en medio de la violencia.

En el año 1982, el Gobierno del Presidente Belisario Betancourt promovió un proceso de tregua y diálogo nacional con las guerrillas que no avanzó. En noviembre de 1985, las FARC hicieron el lanzamiento del movimiento político Unión Patriótica, en el que participaron antiguos guerrilleros de las FARC, fuerzas populares de las regiones, así como militantes del partido Comunista colombiano y de los partidos Liberal y Conservador. Muchos de sus militantes fueron asesinados y la violencia se recrudeció. La negociación con las FARC, se dio por terminada en el mes de diciembre de 1990.

Entre 1990 y 1994 el Gobierno logró adelantar varios procesos de paz y desmovilización, con varias estructuras guerrilleras. Estos grupos se incorporaron al proceso democrático e influyeron fuertemente en la promulgación de la constitución de 1991.

En el año de 1998, hubo un nuevo intento de negociación entre el gobierno y las FARC. Este se celebró en la zona de despeje de El Caguán, oriente del país, donde se instaló la mesa de conversaciones que fue, finalmente, infructuosa.

La guerrilla del Ejército de liberación Nacional (ELN), estableció una mesa de negociación con el gobierno de Colombia en diciembre de 2005, pero, tras dos años de discusión no se logra instalar la mesa de negociación. Sin embargo miles de guerrilleros se vienen desmovilizando de manera individual, en las diferentes regiones del país y también ha habido desmovilizaciones colectivas de gru-

pos de guerrilla como el EPL y el Ejército Revolucionario Guevarista, esta última acompañada por la MAPP/OEA.

En los últimos años se dio el Proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, impulsado por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe Vélez, mediante el cual se logró el desmonte de 36 estructuras paramilitares y que finalizó en agosto de 2006. Se desmovilizaron aproximadamente 32.000 personas que decidieron alejarse de la violencia, más de 18.000 armas fueron entregadas por estos grupos y posteriormente destruidas y se promulgó la Ley de Justicia y Paz, marco de justicia transicional para judicializar a los autores de crímenes durante su pertenencia al grupo y para la exigencia de verdad, justicia y reparación por parte de las víctimas.

El país ha venido realizando un proceso de aprendizaje y ajuste, en el reto de consolidar los mecanismos que le permitan avanzar en la construcción de paz.

Como elementos significativos del Proceso con las autodefensas hay que destacar que:

- Este proceso es el mayor proceso de desmovilización colectiva del continente, lo que supone enormes retos en materia de reintegración.
- Se instauran por primera vez en el país, mecanismos de judicialización de los excombatientes que participaron de graves delitos mediante la ley de Justicia y Paz. Esta, por el número de postulados, la magnitud del proceso y de los hechos investigados supone una serie de desafíos.
- Se establece la necesidad de propiciar la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, y se inicia un debate nacional en torno a las víctimas, ausentes en Procesos anteriores.

Adicionalmente, por primera vez el país contó con un acompañamiento internacional al Proceso a través de la OEA, que informa a la comunidad internacional, institucionalidad colombiana y población en general sobre los avances y dificultades del proceso en Colombia. ■



Conciliemos - Conciliadores en Equidad

en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Mapp-OEA
Misión de Apoyo al Proceso de Paz Colombia

La primera experiencia con comunidades de la MAPP en Colombia

La experiencia que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA ha podido acumular en estos años lecciones importantes. Una de las principales es que las afectaciones por la presencia de los grupos armados son distintas y particulares en cada una de las comunidades del país; otra, que las necesidades de las comunidades se ajustan a los tiempos y desarrollos del Proceso y, con su avance, surgen nuevas demandas. La comunicación con las comunidades y sus líderes, y la participación de éstos, es fundamental para buscar soluciones conjuntas a las necesidades emergentes y consolidar los espacios de convivencia generados.

Quizá por ello, el proyecto de Conciliadores en Equidad en el municipio de Tierralta, Córdoba, durante la zona de Ubicación, es uno de los más emblemáticos, por la incidencia que tuvo y el cambio en la manera de pensarse como comunidad que produjo en la gente, en una

época muy especial y delicada del incipiente proceso de paz.

La Zona de Ubicación, situada en zona rural de Tierralta, Córdoba, comprendió una extensión de 368 kilómetros cuadrados. Esta zona fue decretada el 13 de mayo de 2004 con el fin de: a) facilitar la consolidación del proceso de paz que se adelanta con las autodefensas y el gobierno nacional; b) contribuir al perfeccionamiento del cese de hostilidades; c) avanzar hacia la definición de un cronograma de concentración y desmovilización de los integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia y d) permitir la interlocución de la Mesa de Diálogo con todos los sectores nacionales e internacionales.

Una de las primeras apreciaciones de la Misión y de otras instituciones partícipes del proceso, fue la débil presencia institucional en este territorio. La administración de justicia era tan limitada que había sido reemplazada por mecanismos impuestos por los grupos armados. Las comunidades dieron evidencia de cómo el poder que se ejercía en estas zonas era establecido por los actores armados y cómo, de forma no legítima, éstos tomaban decisiones sobre las riñas vecinales, discusiones comunitarias, e incluso familiares y domésticas siendo un actor que, cada vez más, vivía dentro de las casas de los pobladores.

El proyecto Conciliemos buscó apoyar una figura comunitaria de justicia local elegida democráticamente por la comunidad que fortaleciera el tejido social. La iniciativa se fundamentaba en sensibilizar a la comunidad sobre el proceso de diálogo que se estaba dando en la zona y propiciar capacitación a los recién designados *conciliadores en equidad*, para que estos líderes reconocidos pudieran resolver litigios menores y problemas de la comunidad de manera pacífica. De esta manera, a finales del 2005, en paralelo a las conversaciones gobierno-AUC, la iniciativa se comenzó a implementar junto al Ministerio del Interior y de Justicia e instituciones locales en una serie de veredas de la Zona de Ubicación.

Durante la ejecución, se realizaron amplias jornadas de sensibilización y concertación con el objetivo de poner en marcha estrategias y técnicas de resolución pacífica de conflictos para mejorar la convivencia en las comunidades y dirimir sus diferencias. Así fue posible elegir a 54 líderes comunitarios en un proceso de elección democrática y participativa. En este proceso fueron in-

volucradas 43 comunidades con una población aproximada de 7.000 habitantes.

Durante 27 semanas las personas elegidas asistieron a capacitaciones que abordaron módulos como comunidad, conflicto y convivencia; ética, valores y derechos humanos; el Estado y la administración de justicia; habilidades para una actuación estratégica y el Estado y su compromiso con la convivencia.

Aunque este proyecto tuvo que sortear una serie de resistencias e intromisiones de los antiguos líderes armados, pudo fomentar en las comunidades prácticas de consenso y desarrollo de sus planes colectivos, informar sobre la existencia de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, y acercar la institucionalidad local a los habitantes de la zona rural.

Pero quizá lo más fundamental es que las comunidades que, históricamente habían estado bajo el yugo de actores violentos, volvieron a recuperar un sistema local de justicia en la figura del conciliador en equidad, que les permitió tener mecanismos de resolución pacífica para lidiar con sus problemas cotidianos, recuperando formas de vida cívicas y democráticas que propendan por la construcción de paz. ■





LA REINTEGRACIÓN

El camino hacia la paz

Texto de Frank Pearl, Comisionado para la Paz y Alto Consejero para la Reintegración.

Desde el 2002 el Gobierno de Colombia ha implementado una Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) para luchar contra los grupos narcoterroristas que amenazan la democracia colombiana, a la vez que busca proteger los derechos humanos y fortalecer las instituciones democráticas. Esta política ha logrado disminuir significativamente el tamaño y capacidad de dichos grupos y ha reducido el número de secuestros, homicidios y desplazamiento forzoso en el país de manera significativa. La PSDS es contundente contra los grupos e individuos que insisten en continuar involucrados en actividades terroristas, pero a la vez ofrece una salida para todos aquellos que optan por abandonar sus actividades delictivas y reintegrarse a la sociedad civil como ciudadanos respetuosos dentro del estado de derecho.

De acuerdo con lo anterior, desde el 1 de agosto de 2002 hasta el 5 de mayo de 2010 se han desmovilizado 53.254 personas de los grupos armados ilegales en Colombia, 31.671 como resultado directo de los diálogos de paz con grupos de autodefensas ilegales (AUI) y 21.444 como resultado de desmovilizaciones individuales de miembros de las AUI, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) principalmente.

Comenzando el 2003, el proceso de reintegración era administrado por el Programa de Reincorporación a la

Vida Civil (PRVC) del Ministerio de Interior y de Justicia. En septiembre 2006 se crea la Alta Consejería Presidencial para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (ACR), con el objetivo de contribuir a la consolidación de los logros en materia de paz y de seguridad en el país, por medio de las siguientes acciones:

- Promover la reintegración de las personas que abandonaron los grupos armados ilegales a través de una estrategia de reintegración basada en comunidades.
- Ofrecer beneficios especializados de acuerdo a las necesidades y el perfil de cada persona desmovilizada, incluyendo su familia y miembros de la comunidad receptora.
- Implementar una política de reintegración que busque que las personas desmovilizadas sean llevadas ante la justicia, retornen a sus familias de manera constructiva, desarrollen su autoestima y finalmente lleguen a ser unos buenos ciudadanos.
- Ofrecer un proceso de reintegración equitativo para todos los diferentes grupos armados ilegales, sin discriminación por género, grupo étnico, cultura o religión.

La ACR tiene cobertura nacional a través de 29 Centros de Servicios localizados a lo largo del territorio y ha logrado la inclusión de la política de reintegración en los planes de desarrollo de 20 departamentos y 121 municipios del país. Igualmente la ACR coordina acciones y estrategias con entidades públicas a nivel nacional, departamental y local, facilitando el desarrollo de un sistema nacional para la reintegración.

Adicionalmente, se ha realizado un importante acercamiento con la comunidad internacional, que ha dado como resultado el apoyo por parte de la cooperación en más de \$30 millones de dólares, en los últimos 3 años, y el reconocimiento del Proceso colombiano como uno de los más completos en materia de Desarme, Desmovilización y Reintegración –DDR– en el mundo. Como muestra de esto, la ACR ha firmado cartas de intención con la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (OPAPP) de la República de Filipinas, con la Agencia Brasileña para la Cooperación (ABC) y ha mantenido comunicación con el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (DPKO) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el fin de intercambiar conocimientos relacionados a la Reintegración y contribuir, con el importante conocimiento adquirido por Colombia en esta materia, a otros países y regiones del mundo.

Dentro de este acercamiento con la comunidad internacional, es importante destacar el trabajo conjunto que realiza la ACR con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), quienes siempre han brindado una mirada crítica y constructiva al proceso de reintegración, entendiendo las dificultades y retos que tiene el país para alcanzar el anhelo de la paz. El camino para la consolidación de paz en Colombia apenas está comenzando, y es muy importante contar con acompañantes como la Organización de Estados Americanos, principalmente por el valor agregado que esto tiene en el proceso de reintegración.

Los aportes a la paz en Colombia por parte de la MAPP-OEA van desde sus recomendaciones en los Informes del Secretario General de la OEA hasta la elaboración de documentos de consultoría especializados a solicitud de la ACR, donde se revisan ciertos aspectos del proceso de reintegración a través de trabajos de campo minuciosos, y se hacen sugerencias para continuar fortaleciendo el proceso de Reintegración de Colombia. Esto todo es posible gracias a la relación de confianza que se ha construido entre la ACR y la MAPP-OEA en los últimos años, y al hecho de que compartimos y creemos en el ambicioso objetivo de alcanzar la paz duradera en Colombia.

En los últimos años de proceso de reintegración, la ACR ha logrado avances importantes que contribuyen a la consolidación de paz en Colombia. Sin embargo, aún quedan muchos retos por delante. Estos retos parten de la premisa de que la Política Nacional de Reintegración depende en gran medida del compromiso, confianza, apropiación y participación de todos los sectores de la sociedad colombiana y el apoyo continuo de la comunidad internacional, en especial de nuestros hermanos en las Américas. Es nuestro deber seguir profundizado este compromiso y apoyo de los distintos actores que están interesados en la paz de Colombia, y esto se logra al continuar implementando un proceso de reintegración que ya es reconocido por muchos observadores internacionales como el más sofisticado que haya habido en cualquier lugar del mundo. Esto ha sido posible en gran parte gracias al apoyo incondicional que los países miembros de la OEA nos han prestado a través de la MAPP desde el inicio de este importante proceso. ■

La ACR en cifras

Acompañamiento psicosocial: En el 2009, 34.013 participantes fueron atendidos en las diferentes actividades familiares, comunitarias y asesorías individuales según la ruta psicosocial trazada por el profesional.

Salud: Desde el año 2002 a noviembre 2009, un total de 27.900 participantes del proceso de reintegración se encuentran afiliados al Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Atención en Educación: Durante el 2009, 26.339 participantes fueron vinculados a programas académicos.

Reintegración Económica: En el 2009, 11.136 participantes asistieron a cursos de Formación para el trabajo. En cuanto a *Generación de Ingresos*, en el período 2007 – 2009,

7.086 participantes se han beneficiado del Programa Ser Social. En junio de 2009, 18.087 participantes informaron estar trabajando. En el año 2009, se lograron emplear, por gestión de la ACR 452 participantes del Proceso de Reintegración. A diciembre de 2009 se han firmado acuerdos con más de 313 empresas en todo el país. De julio de 2007 a diciembre de 2009, se han desembolsado 1.204 estímulos para planes de negocio, beneficiando a 1.886 desmovilizados.

Intervenciones Comunitarias: A Abril de 2010 se han intervenido 81 municipios, lo cual se ve reflejado en 13.691 líderes comunitarios formados (participantes del proceso de reintegración, representantes de instituciones y de organizaciones sociales y comunitarias) y 137 proyectos comunitarios ejecutados.



Pensar en conjunto

Módulo de Formación de Líderes en Urabá



En los años 2007 y 2008 se desarrolló el Módulo de Formación en Liderazgo en siete municipios del Urabá Antioqueño y Chocoano: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí, Riosucio, San Pedro de Urabá y Turbo

La zona de Urabá, ubicada en el extremo norte de Colombia y hacia el pacífico, ha sido una de las zonas de mayor violencia del país por décadas y quizá una de las que con mayor fuerza recibió el efecto de la presencia de grupos Paramilitares en el país.

Una vez desmovilizados los bloques, los escenarios para la comunidad, las instituciones y fundamentalmente para los ex combatientes fueron de extrema complejidad y dificultad. Se necesitaba plantear nuevas formas de interrelación y convivencia para tomar nuevas decisiones.

Por eso, entre los años 2007 y 2008, con una presencia de casi 3.000 desmovilizados en Urabá, y tras una serie de actos de violencia cometidos contra desmovilizados en Proceso de Reinserción, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, que tenía sede en esta zona, decide

impulsar y acompañar un proceso de reintegración social donde se fortalezcan los lazos entre los participantes del proceso de reintegración y los miembros de las comunidades a través de diversas acciones que fomenten la convivencia y la reconstrucción de la confianza.

En los años 2007 y 2008 se desarrolló el **Módulo de Formación en Liderazgo** en siete municipios del Urabá Antioqueño y Chocoano: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Necoclí, Riosucio, San Pedro de Urabá y Turbo, con apoyo de la Alta Consejería para la Reintegración (ACR) y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quien lo certificó. En estos módulos participaron líderes sociales de los diferentes municipios y personas desmovilizadas que se determinaron mediante un proceso de selección.

Con seis módulos temáticos y trescientas horas teóricas y prácticas, el Módulo aporta elementos para formar y potencializar en los partícipes cualidades y actitudes para el ejercicio del liderazgo en sus comunidades y, genera competencias ciudadanas que les permitan planear y decidir en grupo, sacar adelante ideas, planes y proyectos contribuyendo de esta manera al desarrollo local. Pensarse como colectivo y como ciudadanos /as para saber que tienen mucho que aportar a sus respectivas comunidades.

El primer Módulo temático de Ética, Valores y Desarrollo Psicosocial, brindó un espacio de crecimiento personal y de construcción colectiva y generó espacios de promoción y formulación del proyecto de vida.

Con el Módulo Habilidades Comunicativas, se fortalecieron los conceptos básicos para promover la comunicación asertiva y eficaz que facilite los procesos de aprendizaje y posibilite la interacción idónea en sus contextos individuales, grupales y comunitarios.

Como eje central de la formación, el Módulo Liderazgo y herramientas de diagnóstico y planeación, permitió que los participantes identificaran y fortalecieran sus capacidades de liderazgo a través de pensar y entender los problemas, presentar propuestas e ideas para lograr mejorar una situación, buscar soluciones, obtener resultados, dirigir, planear, escuchar y motivar a los otros para el beneficio común.

Con la idea de que la construcción de la paz es responsabilidad de todos, el Módulo de Mecanismos Alternativos de resolución de conflictos, sensibilizó a los participantes sobre la importancia de la convivencia pacífica y

la implementación a sus prácticas cotidianas de pautas para encarar y resolver sus diferencias de una manera creativa y constructiva.

El Módulo Participación, Instituciones y Leyes, les permitió conocer los mecanismos de participación en la gestión local y su papel en la democracia, hacer uso de ellos en la transformación de los valores políticos y culturales de los ciudadanos.

Como eje transversal el Módulo Formulación de Proyectos, desarrolló la capacidad de investigación y de resolución de problemas en el ejercicio de elaboración de un proyecto concreto y tangible, a través de una herramienta metodológica que facilita el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos como lo es el Marco Lógico.

Más de 200 hombres, mujeres y jóvenes líderes, se comprometieron cada noche por un periodo de tres meses a tener un cambio positivo en la concepción que presentaban ante el proceso de reintegración, brindándose mutuamente oportunidades de reconocimiento, valoración y respeto; creyendo en una nueva cultura que haga posible que seamos más productivos, competitivos y equitativos, y dándose la posibilidad de conocer y aceptar a los otros a partir de la diferencia.

Hoy en cada uno de estos municipios continúan generándose espacios de aprendizaje, convivencia e inclusión y la mayoría de estos líderes formados y certificados están participando activamente con las herramientas dadas en pro del desarrollo social de su comunidad, de su municipio, de su región: líderes juveniles y comunitarios, miembros de juntas de acción comunal, concejales, conciliadores, empleados, representantes de empresas, estudiantes, profesionales, hoy estos multiplicadores se sienten orgullosos agradecen de corazón la oportunidad de haber estado allí. ■



Vidas

Dos funcionarios de un municipio colombiano, una reinsertada de las AUC y un reinsertado de la guerrilla nos dan su visión sobre el Proceso de Reintegración

cruzadas, paralelas



y encontradas

Verificación de la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG)

Más 30.000 mujeres y hombres se desmovilizaron en el Proceso de Paz que el gobierno colombiano comenzó con las Autodefensas Unidas de Colombia en el 2004, y son aproximadamente 50.000 personas si sumamos los que salen individualmente de las filas de las guerrillas. Todos ellos han comenzado el interesante desafío de volver a la vida civil y reinventarse como ciudadanos y ciudadanas en sus comunidades y, en general, en el país.

Un día de abril del 2010 nos sentamos con Ana Milena Rivero y Ricardo Ramírez, quienes trabajan en el Programa Distrital para la Atención a Desmovilizados y Reincorporados de Bogotá, con el fin de comprender

mejor qué es lo que pasa en la vida de los que vuelven a la civilidad, cómo fue su reinsertión en la vida civil, y qué aprendizajes extraen ellos de su experiencia. Ella es desmovilizada de las AUC, y él dejó las armas en los procesos de desmovilización de la guerrilla durante los 90.

¿Cómo llegaron a las decisiones personales tanto de tomar las armas como de dejarlas y volver a la vida civil?

Ella: *Confieso que la sola idea de volver a reinsertarme en la vida civil como mujer siendo ex paramilitar, me daba terror. No podía imaginar que me señalara en la calle alguna persona que en algún momento yo le hice daño y me daba miedo incluso mi propia organización. De hecho, dejar el arma en la ceremonia fue un sufrimiento, me sentía*

desnuda, me aterraban cosas como empezar a ser una mujer civil, usar ropa de colores y maquillarme. Muchos como yo, acatamos una orden de los comandantes y confiamos en la palabra del gobierno sin saber que nos esperaba.

Él: Al principio el Gobierno nacional no tenía tanta disposición para el trabajo con desmovilizados. Una vez, se empezó a hablar de los procesos con las autodefensas hubo más apertura, y los desmovilizados individuales comenzaron a tocar la puerta de la administración distrital. El distrito decidió trabajar con una lógica de reintegración de derechos de los ex combatientes, en el sentido de asegurar los derechos a la educación, la salud y el empleo para volver a tener los derechos como ciudadano.

¿Qué expectativas han tenido en este proceso de reintegración iniciado en Colombia tanto al principio como ahora?

Ella: cuando nos reunieron después de la ceremonia de desmovilización, nos hablaron de una serie de ayudas económicas pero, una vez pasada la ceremonia, comenzamos a conocer los requisitos reales para poder acceder a cada uno de estos beneficios: cientos de horas en educación, en talleres psicosociales, después acceder al Sistema Nacional de Enseñanza y Aprendizaje (SENA) y de allí una serie de etapas que inmediatamente hizo a muchos desmovilizados pensar que esto era muy difícil.

Imagínate llegar aquí y abrirse paso solita, venciendo la estigmatización de la sociedad, y los prejuicios es una tarea muy dura y cada desmovilizado tiene que enfrentarlo de alguna manera solo, porque los excombatientes siempre seremos para la sociedad el malo de la película y eso hace más difícil vencer los propios miedos.

Por eso me parece vital para nosotros dar a conocer quiénes somos y cuáles son nuestras historias, para que la gente sepa qué hicimos, y también cómo sufrimos. Mi proceso tuvo varias etapas y tuve que aprender a contar mi historia primero a psicólogos del programa de la ACR y después acá en el Programa de la Alcaldía, tuve que vencer mis miedos y contar en espacios públicos mi vida, luego sentarme con compañeros que eran ex guerrilleros, los que ayer eran mis enemigos, e ir construyendo día a día relaciones con ellos, debatir, dialogar y confrontar, ahora con palabras e ideas, con ellos ha sido un proceso muy difícil y duro de internalizar porque seguimos teniendo muchas diferencias. Pero yo le estoy apostando a esto de la manera más sincera.

Él: Las expectativas han cambiado mucho, porque la coyuntura política y la misma política pública son muy cambiantes y eso nos afecta. Ha sido un proceso de construcción permanente en el que la apuesta ha sido intentar desde las instituciones nacionales y departamentales construir confianzas que no había. Para el distrito por ejemplo es una apuesta de confianza que el programa se realice con desmovilizados de todos los grupos, y que, a la espera de definir temas jurídicos, pueden acercarse a otros compañeros y trabajar los temas de la justicia transicional, de la reparación y sobre todo ver cómo garantizamos la no repetición.

¿Cómo se imaginan ustedes que podemos definir y proyectar el fin exitoso de un proceso de reintegración como el que vive Colombia?

Él: las expectativas, las historias y los procesos de cada uno son tan diferentes que es difícil dar una receta que pueda englobar a todos. Una cosa es cierta, es imposible darle tiempos y obligar a las distintas personas a reintegrarse por decreto, una política pública puede generar condiciones pero no dictaminar cuándo uno se reinserta, sobre todo si se piensa desde la perspectiva de una decisión que pasa más allá de los desmovilizados y las instituciones.

Los desmovilizados tienen que garantizar que si uno estuvo allá y hoy está acá, es porque de verdad quiere estar acá, pero eso pasa por muchos factores, que pasan por la confianza, sentirse seguro y apostar a este proceso y no a dobles juegos.

Sin duda, es necesario que estos proyectos nacionales garanticen trabajo y estabilidad a las familias de los ex combatientes, que la desmovilización no signifique volver a la pobreza, también políticas públicas que sean más comprensivas con las realidades y necesidades de los desmovilizados.

Igual es importante que se logre cambiar los estigmas y los enfoques que la propia sociedad tiene sobre nosotros. Allí hay un trabajo enorme que no se ha comenzado a dar en el país, sin duda los desmovilizados tenemos que hacer un trabajo que de un mensaje distinto que logre mostrar el cambio de nuestro proyecto de vida y eso tiene que hacerse con la comunidad, con el trabajo junto a las víctimas.

Tiene que haber una mirada política de este proceso, la gente y la sociedad tiene que darle un valor político a este proceso, si no será difícil cambiar, es necesario hacer un perdón político desde todas las partes que nos lleve a un perdón como sociedad.



blamos de reintegración comunitaria, un logro enorme en el enfoque integral y en el abordaje del tema, un avance enorme que considera a la sociedad como parte del proyecto y actor vital para que funcione.

Ella: Este proceso ha generado que podamos conocer las distintas caras del proceso y eso es un gran avance, se ha generado una dinámica importante porque se ha vuelto un tema amplio compartido que tarde o temprano se leerá como un problema que fue de todo el mundo, y en el que todos tuvieron un rol.

Ella: Los procesos no pueden depender de los subsidios económicos, porque generan dependencias enfermizas, en el momento que yo como desmovilizado diga "me quedo en el proceso porque le apuesto al proyecto entero y no por el dinero" será el momento en el que hayamos dado el paso necesario, pero para eso tiene que haber condiciones de todo tipo, no solo económicas que lo permitan.

Necesitamos que nos conozcan, que conozcan los esfuerzos y el trabajo que estamos haciendo, pero también necesitamos perdonar nosotros a quienes nos motivaron para entrar en esto, nuestras propias historias de vida y al Estado por no darnos condiciones en su momento para tener una vida digna.

¿Qué aprendizaje se rescata como positivo de este proceso?

Él: Es necesario rescatar el esfuerzo que se ha hecho de todos los sectores por evolucionar y mejorar, quizá el esfuerzo por aprender de otras experiencias en la historia de Colombia, para superar el mero asistencialismo. Hoy ha-

Rescato, que se han dado los pasos por visibilizar a todos y se han generado espacios para que todos comiencen a hablar y contar su parte de la historia.

Se está intentando en este país caminar hacia la construcción y la catarsis, y eso no es fácil cuando los discursos polarizados se enquistan cada vez más.

¿Cómo se ve el aporte de la comunidad internacional en este proceso?

Ella: Mientras se pueda garantizar que el proceso avanza y se va consolidando, el papel de la comunidad internacional y particularmente una Misión como la MAPP-OEA es de vital importancia porque permite un mecanismo que ponga los ojos en lo que no funciona y tiene una voz para decir "ojo, hay que corregir y mejorar y poner en rumbo las cosas". Sobre todo las más complejas que a nosotros muchas veces nos cuesta ver por estar inmersos en la dinámica. En ese sentido, este proceso complejo, que a mi gusto está en pañales, tiene cosas por corregir, y necesita de esa mano que le ayude a consolidarse. ■

En la presentación a la Asamblea General del XIV informe, el Secretario General José Miguel Insulza destacó:

"Respecto a la reintegración de los desmovilizados, las acciones de la Alta Consejería para la Reintegración, sumadas a su fuerte presencia en la mayor parte del territorio, continúa generando resultados positivos para los más de 20.000 participantes en ese programa. Paralelamente el compromiso del sector privado frente al tema, aporta también bases sólidas para que en el largo plazo haya un cambio cultural y de cooperación en el país"

Entrevista

Luis González

Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía

La Ley de Justicia y Paz o Ley 975 fue promulgada en el año 2005 con el objetivo de facilitar los procesos de paz y la reincorporación a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley. Al mismo tiempo, busca garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

Conversamos con Luis González, Jefe de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, que tiene sobre sus hombros la labor investigativa: “Desde el principio, nosotros sabíamos que no iba a ser fácil manejar un tema de esta complejidad, con estos enormes volúmenes de trabajo y con estos retos y demandas tan grandes”.

Sin embargo, lo que quizá más enorgullece al Jefe de la Unidad de Justicia y Paz es el aumento gradual de la participación de las víctimas en el Proceso. “Hay más de 18 equipos en los diferentes departamentos del país listos para atender a las víctimas, lo que antes no había en Colombia”.

Uno de los puntos que más se critica de la Ley 975 es la rebaja de penas y los beneficios que se otorgan a los postulados. Sobre esto afirma “Es una tensión diaria entre justicia y paz, entre justicia y reconciliación. Se creó un Proceso de Paz con unas personas que no conocíamos, que no fueron vencidas por las armas y que creyeron en un proceso de diálogo bajo una justicia transicional o una justicia de solución imperfecta. Pero esto, por otro lado, permite a un país conocer a unas organizaciones que era imposible conocer. Permite conocer una serie de hechos que de no existir la ley 975, no se hubieran podido saber nunca. Por primera vez, la justicia colombiana está procesando un número elevado de miembros del Congreso de la República”.

Luis González sabe que el objetivo deseado por los colombianos es la reconciliación, pero enfatiza que lo más importante es que ninguno de los hechos violentos que tuvo lugar vuelva a ocurrir. “El gran anhelo es que nada de eso se vuelva a repetir pero para eso, tiene que haber reconciliación y para que haya reconciliación las víctimas deben sentirse satisfechas, deben ver cómo sus expectativas se ven colmadas”.



En la presentación a la Asamblea General del XIV informe, el Secretario General José Miguel Insulza destacó:

“La participación de más de 280.000 víctimas es una prueba de la legitimidad histórica de este proceso, que requiere ser debidamente entendido por su carácter inédito y su magnitud. A dos años y medio de la ejecución procesal de la Ley de Justicia y Paz, es entendible que los procesos se encuentren en una etapa natural aún de construcción y aprendizaje, en el que se evidencian vacíos y falencias, que deberán ser subsanados durante su aplicación y para ello se requiere el apoyo de todos los sectores que participan directa e indirectamente en el proceso”.



Apoyo psicosocial en Libertad



La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en el marco de su mandato ha establecido como una línea de trabajo el seguimiento, la articulación y el acompañamiento a las instituciones colombianas, en temas como la reparación colectiva y el acompañamiento a las víctimas y sus organizaciones. Por ello, la MAPP junto a las instituciones nacionales buscó identificar cómo se puede fortalecer la capacidad de las comunidades para promover sus procesos de reparación y recuperación emocional desde su cultura, sociedad y familia, a través de mecanismos de apoyo psicosocial y de salud mental.

Para implementar un plan de reparación colectiva para Colombia y obtener algunas recomendaciones, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación está liderando un proceso de diseño de programas piloto de reparación colectiva dirigido a comunidades o colecti-

vos de personas que sufrieron fuertemente las violaciones de los grupos armados

La Libertad, es un pueblo que fue prácticamente confinado por un Bloque Paramilitar por años, en donde la vida y el tiempo se transformaron. De la noche a la mañana, la gente, que no tenía formas de escape del pueblo, comenzó a vivir en una isla gobernada por actores armados

y arbitrarios, al mando de alias “El Oso”, que impusieron un régimen de terror, a tal punto que la comunidad, en un arrebato de desesperación, terminaron linchando y quemando a uno de los paramilitares. Este período, dejó una huella profunda en la población.

Con la ayuda de un equipo de profesionales, la gente comenzó a rescatar y dimensionar la implicación personal de los procesos que vivieron, de tal manera que pudieran trabajar para superar el impacto de las experiencias violentas. Paralelamente, tanto los ciudadanos como la comunidad comenzaron a recomponer las condiciones de salud mental para recuperar el ejercicio de los derechos y alentar la construcción de significados e historias de vida sobre sí mismos como sujetos sociales y políticos que no quieren permanecer anclados en el relato doloroso de la víctima.

Un proyecto que se llevó a cabo mediante mapeos y procesos de identificación del estado de afectación psicosocial de la comunidad y que permitió delimitar las diferentes categorías de los efectos de la violencia en diferentes niveles, tanto individual, como familiar, comunitario y social. Al mismo tiempo, se realizaron procesos de formación y entrenamiento a multiplicadores comunitarios con el fin de favorecer los procesos de solidaridad en las comunidades y promover los espacios de construcción de redes de apoyo psicosocial.

Este apoyo permitió a los propios pobladores explorar sus miedos y sus traumas y desde allí avanzar hacia la reconstrucción de sus vidas, a través de la regeneración de confianza, de la organización, de la cultura y de la civilidad. La Libertad, no es la misma, su gente tampoco, al espantar los fantasmas han comenzado a escribir una nueva página en su historia, la página de un destino distinto, más cercano, más solidario, y con más oportunidades para las nuevas generaciones. ■



Exhumaciones



La camisa

me está llamando

Historia Real
con nombres
ficticios

● Putumayo

// La vecina lo vio salir con esa camisa” me decía Doña Petronila con una foto en la mano en la que aparecía su marido con su camisa a cuadros y riendo. Él fue asesinado por los paramilitares en el año 2002. “Esos días, yo estaba en Nariño porque hace rato venían amenazando a la familia y a los vecinos de la zona”.

Doña Petronila y su familia han vuelto después de varios años a su tierra ubicada en una vereda fronteriza del departamento de Putumayo, en Colombia. A diez minutos de Ecuador, Putumayo ha sido desde siempre una zona rica en petróleo y abundante en problemas. ELN, FARC, Paramilitares y otras bandas han dejado impresa su huella en estas zonas, con todo tipo de afectaciones a la población civil, entre ellas y posiblemente la más conocida en la región, la masacre en el municipio de El Tigre.

El día que Doña Petronila y sus hijas, en el año 2002, tuvieron que salir desplazadas, posiblemente intuían que nunca más verían a su marido, pero él vivía de la tierra y de los negocios, no quería irse y le apostó a seguir trabajando en la tierra mientras se pudiera. A la semana siguiente, la vecina lo vio salir con una camisa a cuadros en su camioneta roja y ya no lo vieron nunca más.

De allí en adelante, la vida de Petronila fue cuesta abajo: desplazada, viviendo en la marginalidad de una ciudad grande que desconocía, sintiendo que en cualquier momento algo le pasaría a sus hijas, perdió para siem-

pre el contacto con su marido. Nunca más supo de su paradero, solo se enteró que algunos paramilitares se quedaban en su casa de vez en cuando.

Sin embargo, la incertidumbre le ganó al miedo y una vez iniciadas las desmovilizaciones de los paramilitares, a pesar que muchos de los grupos guerrilleros continuaban haciendo presencia, ella tomó la decisión de volver a su tierra y volver a enfrentar su pasado. Llegando nuevamente a Putumayo, a los pocos meses se enteró de las primeras jornadas de víctimas y de las gestiones que la Fiscalía de Justicia y Paz estaba haciendo en la zona para encontrar fosas y restos óseos para devolverlos a sus familias.

Entonces, Doña Petronila no aguantó más *“Me avisaron los vecinos que andaba la gente de la Fiscalía y que andaban con la gente de la OEA desenterrando un poco de cuerpos cerca de El Tigre y llenando formatos para las víctimas, así que un día, muy tempranito, me fui a la zona, y me acerque a la fiscal, casi en privado le conté mi caso y ellos me ayudaron a llenar formularios y le tomaron pruebas de sangre a mis hijas para ver si alguno de los restos que ya se habían encontrado podía ser el de mi marido.*



Antes de irme, la licenciada Karina de la OEA me regaló un periódico el de “Rastros” y me fui a mi casa”.

En Putumayo se encuentra en estos momentos uno de los laboratorio de exhumaciones que la Fiscalía de Justicia y Paz colombiana está implementando para la investigación y exhumación de una gran cantidad de fosas de desaparecidos que este departamento presenta. Un proyecto acompañado por la MAPP-OEA que busca acercarse a las víctimas y apoyar el trabajo de las instituciones en el tema.

Una de las estrategias en todo el país que se ha estado aplicando por la Fiscalía para la identificación de los cuerpos exhumados ha sido la del periódico “Rastros”, en donde se publican fotografías y datos de las personas cuyos restos han sido encontrados en distintas exhumaciones, especialmente ropa y efectos personales, y que todavía no han podido ser identificados para que sus familiares por este medio los puedan reconocer y reclamar.

Precisamente, ese periódico “Rastros” fue el que Doña Petronila se llevó a su casa y, ese mismo día en la tarde, se puso a revisarlo con su vecina. “Fue una sorpresa muy impactante porque cuando vimos la tercera página, casi saltó a mi vista la camisa de mi marido llamándome, la vecina me dijo inmediatamente, con esa camisa salió ese día, yo me acuerdo...” “Yo me fui corriendo a donde la Fiscalía a decirles y llevé la última foto que le sacamos a él, con esa camisa justamente”.

Doña Petronila, casi sin saberlo fue una de las primeras personas que ha identificado restos de un familiar a través de este material y sin proponérselo le dio una luz de esperanza a las estrategias de las instituciones colombianas que trabajan duramente por recolectar información y hacerle llegar a sus familias los cuerpos de desaparecidos encontrados.

Doña Petronila, sigue esperando la respuesta de los exámenes de ADN, con la esperanza de que la camisa que la estaba llamando sea una señal de su esposo para cerrar su dolor y su incertidumbre. En Colombia, gracias a los esfuerzos de la Fiscalía y la Unidad de exhumaciones, más de mil restos óseos han sido devueltos a familias de las víctimas que, pese a la tristeza, han podido comenzar a elaborar su duelo. ■



El incidente de reparación, una herramienta para sanar las heridas del pasado

“La comunidad está algo expectante, ha pasado mucho tiempo, muchos trámites, casi dos años de trabajo, para llegar a este punto en donde sabemos que es nuestro momento y es el momento que se haga justicia.” Nos decía Tulio Masa, uno de los líderes de la comunidad de Mampujan que en estos días terminaban de participar en el primer incidente de reparación.

Esta es la parte del proceso de Justicia y Paz donde las víctimas exponen ante la justicia sus expectativas de reparación y de llegar a una conciliación con los infractores. El incidente es una herramienta novedosa que busca reparar de manera integral a las víctimas que han sufrido, no sólo grandes pérdidas a nivel material, sino un daño moral que afectó sus vidas.

“La comunidad espera que se le repare el daño sufrido, no sólo el material sino también el emocional, queremos reconstruir nuestras vidas”, nos dicen los líderes de Mampuján y, para ello, tanto Fiscalía como Procuraduría, Defensoría y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, han hecho un esfuerzo de coordinación y acercamiento a la comunidad para documentar y preparar los casos, e identificar las expectativas de reparación que permitan presentar a la Corte unas peticiones coherentes con el daño sufrido.

El 26 abril del 2002, un grupo de 150 paramilitares al mando de Edwar Cobos Téllez incursionó en la vereda Las Brisas de Mampuján y asesinó a 11 personas, violó a una mujer y dejó a 245 familias en situación de desplazamiento, esta es una breve descripción de los atroces hechos por los que esta comunidad tiene derecho a ser reparada.

Esta primera experiencia abrió las puertas definitivas para que la Justicia Colombiana dicte la primera sentencia de este marco legal, y, sin duda, arrojó grandes lecciones para mejorar los siguientes incidentes, como la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional. Las comunidades y las víctimas de este país tienen el conocimiento y la sabiduría, saben lo que necesitan y, cuando están unidas, tienen la fortaleza para plantear lo que ellas mismas saben que es su derecho.

“Es posible que a otros les reparen mejor que a nosotros, pero será el producto del trabajo y el esfuerzo que salga de este proceso que nosotros hemos emprendido y eso ya es suficiente ganancia para nuestra comunidad, porque le habremos facilitado el camino a otras víctimas para que se relacionen mejor con las instituciones y las cosas salgan mejor y más rápido”; líder de Mampuján. ■



ARHUACOS

un pueblo que se aferra a su cultura

Valorar el papel que pueden cumplir los hombres y mujeres que han sufrido en forma directa y cotidiana la acción de la violencia es una de las experiencias que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA, quiere rescatar de los esfuerzos comunitarios colombianos, y en especial, de la comunidad indígena arhuaca en la Sierra Nevada colombiana.

A los pocos días de establecida la oficina regional en Valledupar de la MAPP-OEA, a finales de julio de 2004, los funcionarios se pusieron en contacto con las autoridades indígenas de la zona con el fin de conocer la situación de la comunidad y explicar el propósito de la Misión. Casi desde ese momento la historia de la MAPP-OEA y la comunidad arhuaca se juntó debido a un caso de buenos oficios tendentes a la liberación de unos retenidos, durante la época del cese de hostilidades.

Sin embargo, fue en septiembre de ese año, que se consolidó el compromiso entre la MAPP-OEA y la comunidad de acompañar y apoyar al pueblo arhuaco con un proyecto que permitiera rescatar las formas tradicionales de justicia y explorar las diferentes causas que ponen en riesgo a su gente, su territorio y su cultura.

Una propuesta que buscaba rescatar y consolidar la resistencia y la lucha pacífica que, históricamente, el pueblo arhuaco ha llevado a lo largo de su interacción

con el mundo de los “blancos”. Los arhuacos han luchado por mantener sus principios y valores alejados de la violencia, principios solamente posibles si se actúa como una sociedad unida, con sólidos referentes de identidad y con unos objetivos comunes y claros. Para lograrlo es necesario ejercer una activa resistencia pacífica de manera decidida y coordinada, y tomar ciertas determinaciones que nazcan del seno de la tradición mediante la “adivinación y consulta” que realizan los mamos (líderes espirituales) en los lugares sagrados. Cualquier decisión que se tome o cualquier acción que se lleve a cabo por esta comunidad, requiere de este mecanismo propio de su cultura y de su relación directa con el territorio, de ahí la importancia de permanecer en él y defenderlo.

En las últimas tres décadas, desde que la violencia armada se agudizó en el país, los arhuacos han sido víctimas de muchos abusos y atropellos, pero fue especialmente en el periodo 2000 a 2005, cuando los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sufrieron las más graves amenazas. El margen que dio el proceso de desmovilización en la Sierra Nevada fue aprovechado para reorganizar formas de resistencia pacífica activa mediante un proceso intenso de fortalecimiento sociocultural y de formación de jóvenes, que recogieron y aprendieron de la experiencia y la tradición de los mayores.

Una experiencia que mostró la necesidad de construir ideas para encontrar el camino del respeto hacia las culturas diferentes y evitar el deterioro de los pueblos. Por ello, la necesidad de hacer memoria histórica. ■





En COLOMBIA todas SOMOS MUJERES

**Mapp-OEA**
Misión de Apoyo
al Proceso de Paz Colombia

“Yo pensaba que la única madre que había perdido un hijo era yo, pero en esta iniciativa encontré muchas mujeres con los mismos problemas, donde cada una de ellas sirvió de apoyo para mí. Conté lo que a mi hijo le había sucedido y cada una de ellas contó su historia amarga. Esto nos ayudó a encontrar una tranquilidad espiritual y así pude librarme de tanta tristeza que llevaba en mi ser, me llevó a abrir nuevas visiones y me conecté con mi capacidad de perdonar, pero no olvidando sino reconstruyendo una memoria histórica que siempre tendré presente”

Rosalina Pacheco

Continualmente las mujeres han sido marginadas en los procesos de guerra y paz. Han sido los hombres quienes han tenido derecho a contar la historia, participar en las negociaciones, tomar las decisiones y elaborar los programas dirigidos a un excombatiente generalmente varón. Para transformar un Proceso de violencia mayoritariamente comandado por hombres, es necesario abrir espacios que permitan escuchar la voz de las mujeres, y generar mecanismos de solidaridad para que, pese a sus múltiples diferencias, puedan encontrar una voz común.

De esta manera, en la oficina de Valledupar, desde el 2007 se decidió iniciar, junto con la Alta Consejería para la Reintegración y la Red de Mujeres del Cesar, el proceso de “Todas somos mujeres”, que consistió en un trabajo organizativo y psicosocial realizado con dos grupos poblacionales de mujeres, mujeres víctimas y mujeres desmovilizadas. Con ellas se hizo un trabajo paralelamente, para, en una fase posterior unir a los dos colectivos en un proceso de encuentro que pueda fomentar la reconciliación, a través de la identificación y la vivencia común de ser mujer.

Es en un contexto de muchas inseguridades y con brotes de violencia en la zona que nace la Iniciativa “Todas Somos Mujeres”, cuando el temor aun estaba presente y todos creían que hablar de reconciliación era una ta-

rea prácticamente imposible. Las víctimas de la violencia paramilitar comenzaban un proceso de visibilización en la región, a pesar de los miedos, las mujeres habían sabido organizarse y asociarse para defender sus propios derechos, reclamar participación, justicia y reparación. En este sentido la MAPP-OEA, se erigió como un importante apoyo, lo que facilitó la construcción de sólidas relaciones de confianza con las organizaciones de víctimas.

Mediante encuentros conversacionales reflexivos, donde se trabajaba una temática específica, se buscó que las participantes fueran constructoras de su propio proceso de cambio generando estrategias de solución a sus dilemas vitales de manera consensuada. Los temas abordados fueron identidad, roles, habilidades y recursos, liderazgo y autonomía, violencia y reconciliación.

“La iniciativa nos ha servido pero el encuentro que hizo eco en mí fue el de la Reconciliación: el día que nosotras como victimarias le pedimos perdón a las víctimas de la violencia y les hicimos la entrega de un arreglo floral, con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano les pedí perdón, y ese perdón fue sincero. Gracias a esas mujeres por todo lo que me han enseñado.”

Luz Paulina de la Rosa

Como ellas mismas definieron: “un escenario integrado por mujeres y/o organizaciones de mujeres, incluyente, que pretende construir procesos de reconciliación a partir de sus propias historias de vida, basados en el respeto a los Derechos Humanos, en principios de equidad y solidaridad para la convivencia.” Actualmente este proceso se replica en otras zonas del país.

Para la MAPP-OEA, este proceso fue fundamental, sobretodo, en aquel primer periodo post desmovilización, porque permitió entender que el rol que jugábamos en este país a través de nuestra verificación y acompañamiento era contribuir a restaurar, restablecer y reconstruir los vínculos de confianza entre los propios afectados por el conflicto, entre la sociedad en general y el Estado, siendo conscientes que es un proceso que involucra a todos los actores. ■



San Carlos

construyendo procesos de reconciliación para cerrar el círculo de la violencia.



El Municipio de San Carlos, ubicado al oriente del departamento de Antioquia, ha sido famoso en las últimas décadas por sus suelos ricos para la agricultura, el ganado y por que en ese territorio se han asentado en distintos momentos una serie de grupos armados ilegales que han escrito la historia de la comunidad con dolor y violencia.

En este pueblito de Antioquia vive Pastora Mira, Concejala en ejercicio y ex inspectora de policía del pueblo. Una mujer pequeña e inquieta que anda todo el día con una sonrisa en la cara, a pesar de cargar con el dolor del asesinato de su padre, de su esposo y de dos hijos por distintos grupos armados. Esta mujer ha sido testigo y protagonista de un movimiento social en el municipio que ha logrado superar la violencia y transformarla en solidaridad y esperanza, acercando a víctimas y victimarios para trabajar juntos y construir un modelo de reintegración basado en la comunidad.

Este proyecto llamado CARE, Centro de Acercamiento para la Reconciliación y la Reparación, se gestó en el 2004 como una propuesta de un movimiento cívico que llega al Consejo Municipal a pesar de las amenazas y la violencia, para proponer políticas públicas que dieran espacio a la reconciliación y la reconstrucción del tejido social, y tras un cabildo abierto en el 2005, nació.

Como nos dice Pastora “creamos un espacio de contención, una válvula de escape a tanto dolor, tanta angustia,



que nos permitiera ayudar a los otros, en donde se pudiera atender a las víctimas, pero que también permitiera recomponer la relación con los ex combatientes, que antes fueron los que habían provocado el daño, sin darles la espalda, conscientes de que en estos pueblos la abuelita de un desaparecido es la mamá de un desmovilizado”.

Con los primeros talleres psicosociales a desmovilizados de la política gubernamental de reintegración, con la Ley de Justicia y Paz implementando sus primeras herramientas de denuncia para las víctimas y las instituciones intentando articularse llega la MAPP-OEA al municipio.

Según Pastora “La Misión fue como una caja fuerte que blindó el proceso de San Carlos, que permitió que muchas instituciones públicas y privadas se comenzaran a acercar para apoyar este proceso y consolidarlo. Fue el momento justo en el que, con la decisión de muchos de hacer del dolor una transformación, se comenzó a trabajar con las víctimas, a generar conciencia, y sensibilizar a los guerreros. La MAPP-OEA nos brindó una coraza a quienes querían tomar la decisión de denunciar y acceder a sus derechos, en un contexto donde el poder local y algunas instituciones todavía tenían vestigios de connivencia con los anti-

guos grupos". Venciendo miedos y prejuicios, desmovilizados y víctimas comenzaron lentamente a compartir espacios de trabajo conjunto, para rescatar la historia de los seres humanos que existían antes de la violencia.

"Junto con la MAPP-OEA, decidimos que era el momento de hacer algo y nos animamos a explorar en terrenos muy complicados. Hace rato teníamos información de algunas fosas y territorios minados, pero si uno hablaba corrías el riesgo de ser enredado con eso, entonces había que buscar mecanismos que nos permitieran avanzar en esto, más que nada por la gente. Entonces, decidimos aprovechar la coyuntura e iniciar una metodología de búsqueda anónima de los desaparecidos y los campos minados, a través de mapas y talleres en donde la gente podía identificar de manera anónima, donde hubo campamentos, donde hubo disputas territoriales, y una serie de informaciones que nos permitieron armar un mapa para identificar con propiedad donde estaba lo que buscábamos sin comprometer a nadie, y que ahora nos ha permitido encontrar 30 restos óseos.

Entonces toda vereda que tuviera habitantes se seleccionó para la sensibilización y talleres, con una metodología que tuvo mucha credibilidad en el municipio por el apoyo que nos brindó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación y la MAPP-OEA. Esta fue la fórmula de destacar una enorme necesidad de la gente que evolucionó en proyectos más importantes en las que se vincularon otras instituciones como Vicepresidencia, el Ejército, el Proyecto de Desminado de la OEA, para generar procesos de desminado humanitario e incluso ahora con el municipio de Medellín retornos sostenibles de las familias desplazadas."

En la actualidad, San Carlos sigue trabajando para romper el círculo del dolor y de la violencia, para sanar y construir un nuevo proyecto de vida con más oportunidades, en el que todos puedan crecer juntos. Como Pastora enfatiza *"ese es el tema de la reconciliación, que todos nos sintamos capaces de poder ser solidarios con el otro sin importarnos el pasado. Reconciliándome conmigo misma del dolor, porque no somos culpables de lo que pasó pero somos responsables de lo que pase a futuro, de lo que hagamos con las nuevas generaciones. Por eso es tan importante que seamos responsables en la sanación, es la única manera de que podamos brindar una mano amiga incluso a los que rompieron duro con nuestras vidas."*

"Con la propuesta que construimos en un inicio con la MAPP-OEA, en el fondo lo que hicimos fue que San Carlos encontró la forma de hacer una propuesta colectiva en la que, de a poco, cada una de las personas se han ido sumando: víctimas, victimarios y toda la comunidad. Hemos recuperado la ciudadanía, recuperamos la institucionalidad y la gobernabilidad, en el trayecto logramos aprender a resolver conflictos y generar una sociedad con mejor convivencia que dio como resultado más participación y esto fue lo que realmente desencadenó que la información sobre fosas, minas y esas cosas salieran a la luz y que nos ha permitido un poquito de sanación.

San Carlos le corrió el telón al miedo y téngale miedo cuando los que tuvimos miedo ya no tenemos miedo, porque es el primer paso para reconstruir la historia, porque no hay barreras para contar lo que pasó. Vengo de una historia de violencia y he visto caer a los delincuentes, eso me ha demostrado que más tarde que temprano, los delincuentes caerán y la justicia reinará, aunque se demore". ■





¿Que han dicho los Informes trimestrales de la MAPP/OEA sobre el proceso?

En su Resolución CP/RES. 859 (1397/04), la Organización de los Estados Americanos dispuso que, trimestralmente, el Secretario General informe al Consejo Permanente sobre las labores de la MAPP-OEA en Colombia. Han sido ya 14 Informes presentados, el primero fue presentado el 11 de mayo de 2004, y el último fue presentado en abril del 2010. Esta es la principal herramienta de la MAPP-OEA para informar de los avances y dificultades del Proceso y sus diferentes grados de desarrollo y ha servido para visibilizar los grandes hitos.

Uno de los principales retos fue la verificación del cese de hostilidades declarado de manera unilateral por las AUC. Desde el Primer Informe Trimestral, la MAPP-OEA advirtió que la verificación sobre este aspecto sólo podía ser realizada de manera efectiva en el marco de unas zonas de concentración previamente establecidas. Con el objeto de vigilar el cumplimiento del cese de hostilidades, se estableció en Santa Fe de Ralito el Comité de Verificación, integrado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, las AUC y la Misión; ante esta

instancia se presentaron las denuncias recibidas en terreno sobre presuntas violaciones al cese de hostilidades. La Misión advirtió de hechos de no cumplimiento del cese por parte de las AUC en su tercer, cuarto y quinto Informes.

Con relación a la desmovilización y el desarme, en el Tercer Informe Trimestral la MAPP-OEA registra la desmovilización del Bloque Bananero de las AUC al mando de “Hernán Hernández”, primera desmovilización a la que asistió como observador. El Informe describe la puesta en marcha de esta tarea, inédita en Colombia, en la que la Misión cumplió su papel mediante el acompañamiento a los traslados de las autodefensas, su seguimiento en las zonas de concentración, la sensibilización de comunidades y combatientes, la verificación de los listados de las personas y armas y la generación de confianza. El 15 de agosto de 2006 en el municipio de Unguía (Chocó) se desmovilizó el último bloque. Durante esta etapa se dieron 38 actos de desmovilización de los cuales hicieron parte 31.689 miembros de este grupo armado irregular.

A través de los Informes Trimestrales la Misión alentó al Gobierno colombiano a avanzar en la destrucción del armamento entregado por las autodefensas. En el Octavo Informe Trimestral la MAPP-OEA registra avances positivos en este sentido, como las directrices impartidas por el Gobierno para iniciar el proceso de inspección y empadronamiento del material de guerra. El acto final de destrucción del armamento se produce en el mes de diciembre de 2007 con la destrucción de más de 18.000 armas.

A partir del Cuarto Informe, se informa sobre el monitoreo a la reintegración continuamente. Un hito, en el Décimo Informe, finales de 2007 es que la Misión reconoce que la Alta Consejería para la Reintegración, ha desarrollado una estrategia a nivel nacional que viene dando resultados paulatinamente y que la reintegración ha comenzado a tener un nuevo rumbo. Por otro lado, ha sido recurrente la preocupación expresada por la Misión en cuanto a la seguridad de los desmovilizados y al alto número de desmovilizados asesinados en el transcurso del proceso.

Un tema que produjo especial impacto de los Informes fue la verificación de la desarticulación de la estructura armada de las AUC. Luego de la desmovilización, la Misión identificó estructuras de menor tamaño que estaban lideradas por mandos medios de las AUC. Lo anterior fue reportado en el Sexto Informe Trimestral con la utilización de tres categorías: 1) reagrupamiento de desmovilizados en bandas delincuenciales que ejercen control sobre comunidades específicas y economías ilícitas; 2) reductos que no se han desmovilizado y 3) aparición de nuevos actores armados y/o fortalecimiento de algunos ya existentes en zonas dejadas por grupos desmovilizados. En el Octavo Informe, la Misión manifestó que había identificado en terreno 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente tres mil integrantes, de los cuales, una parte fueron miembros de las autodefensas.

La MAPP-OEA identificó, en el Noveno Informe Trimestral, un conjunto de tendencias sobre estos grupos: 1) la emergencia de alianzas y articulaciones bajo liderazgos definidos; 2) la permanencia de estructuras de mando en la clandestinidad –especialmente mandos medios–; 3) el reclutamiento y la alta movilidad de los ex combatientes; 4) la adaptabilidad y flexibilidad en el Modus Operandi de las estructuras ilegales emergentes; 5) la afectación de poblaciones y comunidades vulnerables; 6) el copamiento de áreas dejadas por las autodefensas por estructuras del narcotráfico. De acuerdo con lo reportado en el Décimo Informe, esta última tendencia ha venido ganando fuerza.

A partir del Décimo Primer Informe se pretende ir más allá de la descripción y conceptualización de las estructuras emergentes para enfocarse en la afectación que éstas producen a las poblaciones.

El marco jurídico del proceso, ha sido tal vez uno de los puntos más dinámicos. A partir del Cuarto Informe, se reporta el inicio de los debates en el Congreso de la República sobre el proyecto de Ley de Justicia y Paz. A lo largo de sus siguientes informes la Misión monitoreó los avances y las dificultades en la expedición, sanción, e implementación de la Ley de Justicia y Paz; señaló retos y expresó recomendaciones, siempre reconociendo el gran esfuerzo de los colombianos por dar un marco jurídico a la demanda de verdad, justicia y reparación de las víctimas de la violencia y la sociedad en su conjunto.

En el Noveno Informe Trimestral, la Misión reconoce los primeros avances fundamentales, al revelarse por medio de las versiones e investigaciones la influencia paramilitar en la vida política, económica y social de las regiones. Igualmente, reconoce que gracias a este mecanismo, miles de víctimas, a pesar del temor y las amenazas, han iniciado una lucha para reclamar sus derechos.

La Misión ha llamado la atención sobre la necesidad de generar modelos integrales de atención a víctimas; fortalecer los mecanismos de difusión y capacitación para que las víctimas accedan y participen en las diferentes etapas del proceso, y reforzar los mecanismos de seguridad para protegerlas. En el Décimo Tercer Informe se ratifica que la falta de seguridad personal es un fac-

tor que incide negativamente en la participación de las víctimas en el proceso.

En el transcurso de los Informes Trimestrales presentados por la MAPP-OEA, se ha potenciado el compromiso de la OEA por acompañar las iniciativas de paz que se adelantan en Colombia. En los primeros años de la Misión, se evidenció la necesidad de acercarse a las comunidades que habían sido afectadas por la violencia paramilitar, especialmente las comunidades indígenas y las que habitaban en la Zona de Ubicación en Tierralta (Córdoba). Posteriormente se han desarrollado actividades de este tipo en todo el territorio de Colombia incluyendo a población diversa: indígenas, afro descendientes, desmovilizados, niños y niñas, líderes y víctimas.

A través de los Informes Trimestrales, la Misión ha identificado los avances y los factores críticos del Proceso y ha alertado sobre situaciones que pueden llegar a comprometerlo a instituciones, comunidad internacional y población general. De manera constructiva, ha formulado recomendaciones a partir de su contacto directo con las comunidades e instituciones, reconociendo las capacidades instaladas en Colombia y la voluntad de dar continuidad y cumplimiento a un Proceso que contribuye a la construcción de la paz. Muchas observaciones han sido atendidas por el Estado, no obstante, una parte de los desafíos persisten y las situaciones observadas en algunas comunidades permanecen, lo que sugiere la necesidad de realizar esfuerzos importantes para consolidar avances. ■

Cómo vencer el miedo

Relato de Pastora Mira

Cuando el fuego nos quema tanto ya nos atrevemos a tocar la llama, así es lo que nos pasa a muchas de las víctimas, es tanto el dolor que llega un punto en el que el dolor y el miedo ya no nos duele tanto y somos capaces de todo. Ya en el tiempo en que los paramilitares operaban en el municipio, las víctimas habíamos empezado a juntarnos casi en el anonimato. Pero, fundamentalmente, en mi caso me han pasado tantas cosas que he sido capaz de enfrentarlos a los comandantes a la cara y decirles que me entregaran a mi hijo o ir a buscar los cuerpos de personas que ellos habían asesinado en el pueblo y los habían hecho pasar por muertos en combate, he sido capaz de sacarlos del consejo municipal y enfrentarlos. Es que me ha tocado vivir la experiencia del dolor desde los cinco años, el asesinato de mi padre, de mi esposo, de mis hijos, el desplazamiento forzado. Pero también me ha tocado pasar por la experiencia de encontrarme con el que decapitó a mi padre y con una enfermedad incurable y aprovechar la oportunidad de la vida de no convertirme en una persona tan despreciable y dar un paso y ayudarlo en ese momento. A tres días de que habían asesinado a mi hijo encontrar botado en una calle herido a uno de los chicos paramilitares que nadie quería atender, ayudarlo a curarse y darme cuenta por sus propias palabras que había sido el asesino de mi hijo, una oportunidad de la vida para romper y cerrar el círculo del dolor. Es que no hay mejor juez que la propia historia todos los actos que uno hace son los hechos



Dónde estamos

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA extiende su cobertura territorial en el país mediante 13 oficinas regionales y una sede central.

Con casi un centenar de personas, hace presencia y acompañamiento en 1901 municipios de Colombia.

Países donantes y amigos

- | | | | |
|--|----------------|--|-----------|
| | Alemania | | Argentina |
| | Canadá | | Bahamas |
| | España | | Brasil |
| | Estados Unidos | | Chile |
| | México | | Guatemala |
| | Países Bajos | | Irlanda |
| | Korea del Sur | | Perú |
| | Suecia | | Tailandia |
| | Suiza | | |



Organización de los
Estados Americanos

Cra. 7a No. 114-33 of. 801 Bogotá, Colombia
www.mapp-oea.org
info@mapp-oea.org
Tel.: (571) 59323600

